Informe académico final de investigación

Información general de proyecto

Código Interno	Acta N°01	Supervisor/ Director Centro de Investigación	Norhy Torregrosa Jiménez
Nombre del proyecto de investigación	El campo Jurídico en los Procesos de Paz con las Farc	Fecha de inicio del proyecto.	Enero de 2015. Acta de legalización 16 de marzo de 2016.
Nombre del Investigador principal	Alvaro Moreno Duran	Fecha de finalización del proyecto.	30 Junio de 2017
Nombre de los co- investigadores	Jaime Alberto Sandoval Mesa	Fecha de presentación del informe de avance.	Diciembre de 2016
Nombre de los auxiliares de investigación /estudiantes de semillero vinculados		Fecha de presentación del informe de cierre	15. 11. 2017
Grupo de Investigación/Semillero	Grupo de Estudios de Derecho Privado. Grupo de Derecho Público Francisco de Vitoria	Centro de costos asignado	
Nombre de la línea activa de investigación	Sociología Jurídica Derecho Penal y Realidad	Facultad y programa	Derecho

INFORME FINAL PROYECTO:

“EL CAMPO JURÍDICO Y LOS LIMITES DE LA PENA EN LOS PROCESOS DE PAZ.”

Contenido

El informe final es un documento académico en el cual debe plasmarse el proceso de investigación y los resultados obtenidos con base en los objetivos, la problematización, la apuesta teórica y la metodología planteada. Entre otros, para la elaboración del informe se debe tener en cuenta los siguientes aspectos orientadores:

- ✓ Título final
- ✓ Resumen (indicando los resultados obtenidos)
- ✓ Palabras clave
- ✓ Marco teórico y estado del arte elaborado.
- ✓ Consecución de los objetivos general y específicos planteados
- ✓ Resultados.
- ✓ Conclusiones.
- ✓ Referencias.

PRINCIPALES DESAFIOS DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL EN EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA CON LAS FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.).

Autores

- ***Jaime Alberto Sandoval Mesa***⁻¹
- ***Álvaro Hernán Moreno Durán***⁻²

Resumen:

El presente artículo, constituye el informe de investigación, en el cual se examinarán los posibles límites y nuevas propuestas frente a la regulación de la justicia en virtud de los acuerdos de paz logrados con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en el proceso adelantado desde 2012 hasta la actualidad. Frente a esto, el objeto se centra en analizar el problema de la decisión del Estado, en los acuerdos de 24 de agosto de 2016 y 24 de noviembre de 2016 en la búsqueda de una solución flexible para superar un conflicto de más de 60 años, aun cuando esto tenga costos de falta de aceptación social, más allá de las tensiones jurídicas que se presentan en el ámbito punitivo ordinario. Para tal efecto, el presente trabajo se abordará a través de un método hermenéutico y de análisis jurisprudencial, como también en la perspectiva socio jurídica, mediante herramientas de análisis documental, herramientas históricas, propositivas, reflexivas y descriptivas.

Palabras clave

¹ Doctor en Derecho USTA, Magister en Derecho Penal. Abogado Universidad Santo Tomás, Profesor Universidad Santo Tomás – Artículo Informe de investigación. Proyecto: El campo jurídico y los límites de la pena en el proceso de paz. Vigencia 2015-2016.

² Sociólogo Universidad Nacional. Doctor en Derecho Universidad de Paris VI. Profesor Universidad Santo Tomás. – Artículo informe de Investigación. Proyecto: El campo jurídico y los límites de la pena en el proceso de paz. Vigencia 2015-2016

Conflicto armado, pena alternativa, pena, justicia transicional, crímenes internacionales, medidas flexibles, restauración social

Abstract

This article will examine the possible limits and new proposals regarding the regulation of justice under the peace agreements reached with the FARC (Revolutionary Armed Forces of Colombia) in the peace process that has progressed from 2012 to the present. Against this, the object is to analyze the problem of the State's decision in the agreements of August 24, 2016 and November 24, 2016 in the search for a flexible solution to overcome a conflict of more than 60 years, Even if this has even costs of lack of social acceptance, beyond the legal tensions that arise in the ordinary punitive area. For this purpose, the present work will be approached through a hermeneutical method and jurisprudential analysis, as well as in the socio-legal perspective, through tools of documentary analysis, historical, propositive, reflexive and descriptive tools

keywords

Armed conflict, alternative penalty, penalty, transitional justice, international crimes, flexible measures, social restoration

Introducción.

Los fundamentos de legalidad de la pena surgen como fruto de la conquista del sistema democrático de la modernidad, atendiendo un proceso de evolución contemporánea, tanto del sistema de derechos como de garantías fundamentales. (MIR PUIG, Santiago, 2003 P. 64).

En el sistema contemporáneo tanto la definición de los delitos como el límite de la pena, se caracterizan por tener un sentido pragmático e inspirar a sus analistas por los principios humanitarios expuestos desde los derechos del hombre y del ciudadano. De otra parte, la influencia de Beccaria “en su principio de proporcionalidad”, indicaba que a mayor gravedad

del delito mayor castigo y viceversa. Justamente en este aspecto tanto de definición de conductas como del castigo, se observa un primer elemento de pragmatismo en el caso colombiano, que bien puede contradecir estos postulados canónicos del derecho penal. En efecto, en lo que concierne a la justicia transicional se puede apreciar todo lo contrario, graves conductas y menos castigo, sin embargo, todo ello puede ser ponderado en favor de la paz, no sólo en este último proceso, sino también en la primera norma de justicia y paz de 2005 (Ley 975). Ahora parece una mayor flexibilidad que en el primer caso. Por tal razón urge la comparación y verificación de sus fundamentos y posibles motivos que la sustente.

Si se decide por el pragmatismo, es posible señalar que el mismo, tiene en sus orígenes elementos de la fuente utilitarista, en principio inspirada por Jeremy Bentham (1748-1832). Este filósofo inglés quien fundara la doctrina del utilitarismo y quien expresara que “el principio mayor de la moral consiste en maximizar la felicidad” Según Bentham, debe hacerse todo aquello que maximice la utilidad. Por “utilidad” entendía cualquier cosa que produjese placer o felicidad y cualquiera que evitase el dolor o sufrimiento” (SANDEL Michael J. 2013. P. 45.). Como bien se puede apreciar, se trata de una apuesta por superar el dolor desde esta perspectiva. En el caso del conflicto desde esta perspectiva se puede justificar a la Justicia como mecanismo para tal efecto y de paso de superación del mismo.

Con base en esta premisa el filósofo logra incidir en la política, los gobiernos, y no fue la excepción los legisladores; el principio de utilidad para la sociedad especialmente se insinuaba como patrón para en determinada circunstancia, tomar decisiones sobre la base matemática de lograr el bien o la felicidad en conjunto por encima de circunstancias particulares, pues en volumen se justificaba que mayor número de personas le llegaba la felicidad con una determinada decisión. Esta medida pretendía ser la correcta pues habría menos dolor y esa era la meta del mundo de lo que se consideraba la justicia. Posteriormente este principio fue revisado y criticado pero retomado en algunos aspectos por varios teóricos como John Stuart Mille, que sin destruirlo, lo descafeína volviendo estos principios más humanos o incluyendo la libertad individual que subrayaba que el Estado “...no debía

interferir en la libertad individual para progresar a una persona de sí misma o para imponer lo que la mayoría crea que es la mejor manera de vivir.” (Sandel Michael. 2013, P. 63.)

Elementos o destellos de los principios utilitaristas aludidos aquí aún persisten en los sistemas como el de oralidad que se instala en Colombia y en otros países de América latina, cuya razón práctica es la utilidad tanto del tiempo como de la economía. En el tema que nos ocupa de la Pena en el marco específico de la justicia transicional podríamos advertir que la pena también ha sido sujeto de los procesos históricos cuyas influencias teóricas como el utilitarismo quizá la haya afectado en ciertos momentos o épocas de predominancia del pensamiento utilitarista, de ahí el debate que sobre ella se ha cernido e tanto su flexibilidad o severidad.

Es entonces la justicia transicional, como justicia alternativa, la que enmarca los diálogos de paz en cuanto pauta normativa dentro de ellas el de la pena de quienes se acojan a esta justicia. Para los miembros involucrados de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) se ven avocadas a unos parámetros internacionales jurídicos que dependiendo de los tipos de delitos y de las condiciones propuestas por el Estado para la paz, son los que limitan en principio las penas de los subversivos que se acojan. Y aludiendo al principio utilitarista podría plantearse hipotéticamente que las penas planteadas aquí obedecen a la racionalidad utilitaria en cuanto a tiempo, economía y especialmente en vidas y traumas productos de la violencia. Justamente se puede analizar que el castigo y la pena no son los únicos factores que representen la justicia en este sentido para las acciones de las FARC y los demás actores que se acojan al proceso.

En el caso colombiano, el problema principal se centra en cuestionar, cuales son los límites de todos estos factores que se contraponen en la actualidad, con la necesidad de las víctimas y de la sociedad frente a fundamentos constitucionales y legales que deben fijarse como castigo. Esto obedece a que no solo en virtud de los procesos de justicia transicional que han tenido lugar en la última década en Colombia, se ha presentado esta misma tendencia, sino también en la actualidad, con relación al grupo insurgente de las FARC (Fuerzas Armadas

Revolucionarias de Colombia). Lo anterior cobra vigencia, frente a un posible armisticio de paz, en el cual se analizan los factores señalados, los cuales tendrán unas obligaciones y exigencias distintas de las concebidas en el poder punitivo vigente, en procesos transicionales anteriores y más aún frente a las obligaciones de los responsables de hechos delictivos.

1. La definición de las FARC – Características y determinación como actor partícipe y deliberante en el Conflicto Armado.

En los años sesenta en Colombia, se originan los dos grupos guerrilleros más importantes como lo fueron el ELN -Ejército de liberación Nacional- y las FARC –Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-, vigentes en la actualidad (MOOR Marianne y ZUMPOLLE Liduine. 2002. P. 21), derivados de los movimientos sociales y anteriores grupos armados de campesinos de autodefensa que habían luchado contra el régimen conservador y la dictadura militar durante la violencia, los cuales no se insertaron en la vida civil y además desconfiaban del nuevo régimen (ITURRALDE Manuel. 2010. P. 62). Tales grupos guerrilleros inicialmente, se constituyeron como grupos de resistencia campesina, originados a finales de la década de los cuarenta.

En relación con los grupos subversivos, el grupo base de las FARC se origina en 1964 y desde su formación, contó con el apoyo de la antigua Unión Soviética. Mientras tanto el ELN, recibió ayuda de la revolución cubana, principalmente durante el período de la guerra fría (MOOR Marianne y ZUMPOLLE Liduine. 2002 P. 21). Se menciona que en este tiempo, “La Habana” ayudó a este grupo en la capacitación, organización y entrenamiento de sus miembros y tuvo un crecimiento relativo hasta 1973 año en que las acciones militares casi logran su exterminio (MOOR Marianne y ZUMPOLLE Liduine. 2002 P. 21).

Si se compara con el conflicto de El Salvador, su duración es menor y aun así sus consecuencias similares. En este escenario se da cuenta de que “en los años de enfrentamiento bélico, de 1981 a 1991, las instituciones estatales desarrollaron estrategias militares de control y eliminación de la población civil para combatir a los grupos alzados en armas”. EN

este caso la confrontación se dio entre fuerzas estatales y la guerrilla salvadoreña, principalmente, aunque también se da cuenta de grupos paramilitares. En este sentido se evidencia que, en tales circunstancias, “se sofisticaron los procedimientos hasta constituir patrones de violencia desde la concepción de que el opositor político era sinónimo de subversivo, terrorista o enemigo”. (Tribunal de Aplicación de la Justicia Transicional en el Salvador. (P.P. 7 Y 8) Disponible en

http://www.uca.edu.sv/idhuca/images/descargas/descargas_publicaciones/7_tiajres_2009.pdf. Consultado el 12.11.2017). No obstante, los acuerdos de Chapultepec (1992) que corresponden a los procesos de paz de “El Salvador”, implicaron que los elementos de reconciliación han tenido como tarea restablecer los derechos de las víctimas, al igual que se pretende en el caso nacional.

En este sentido, a pesar de que se cuestiona si los fundamentos políticos de las FARC, tienen en los momentos actuales legitimidad e influencia en el país, lo cierto es que pretenden pasar a otro plano de la lucha armada a otro de tipo democrático, lo cual implica para Colombia convertirse después de 60 años en un país en estado de normalidad y no de excepción. No obstante, todo esto acarrea múltiples inconvenientes que en el punto de la sanción punitiva tratará de ser planteado en el presente trabajo, en virtud de los procesos transicionales que han sido promovidos en Colombia como la Ley de justicia y paz.

2. Los elementos de derecho interno ordinarios en la definición de la Responsabilidad penal – La pena.

El sistema punitivo colombiano, tiene por objeto prevenir unos fines especiales y unas funciones determinadas de la pena en caso de responsabilidad penal (FERRE OLIVE Juan C. Et Al. 2010. P. 75) También define sus elementos de legalidad, conforme a la orientación de política criminal centrada en los movimientos eclécticos o de la unión (equilibrio entre la retribución de la pena y la prevención tanto general y especial) para satisfacer las necesidades de justicia de la comunidad. (FERRE OLIVE Juan C. Et Al. 2010. P. 75).

El principio anterior, se constituye en primer lugar, por la determinación, certeza y taxatividad que exige una formulación precisa de los preceptos penales que preservan la

seguridad jurídica, como también definen la responsabilidad de la conducta punible e imposición de la pena (FERRE OLIVE Juan C. Et Al. 2010. P. 76 y 77).

No obstante, en la era actual, es posible advertir como lo señala Borja Jiménez, una ampliación de los principios penales, más aun si se trata de procesos transicionales. Por ejemplo se observa una noción derivada de procesos internacionalización que se presentan básicamente en sus fundamentos; en la teoría del delito o en la teoría de la pena como en este caso; en la tendencia metodológica de la dogmática penal igualmente, entre otros aspectos. Si bien esto se ha extendido a diversos países, desde la estructura de la norma jurídico penal se pueden apreciar grandes diferencias desde el plano cultural, étnico, histórico, político, ético y religioso, etc. (Borja 2012, 12) que van a marcar el desarrollo de instituciones como el principio de legalidad penal. Es decir en principio se debe aceptar este proceso de transformación que será importante al momento de desarrollo de los mecanismos de justicia especial para la paz.

Todo lo anterior en el derecho penal, implica el control jurídico formalizado que se constituye en las diversas instituciones del derecho penal, como medios de control social que tiende a evitar diversos comportamientos sociales que se repudian indeseables, acudiendo para ello a la amenaza de imposición de distintas sanciones para el caso de que dichas conductas se realicen. En este sentido el derecho penal prevé las sanciones en principio más graves, como las penas y las medidas de seguridad como forma de evitar los comportamientos peligrosos – Los Delitos -, como garantía al ciudadano (MIR PUIG, Santiago. 2003 P. 5).

No obstante, en este caso la sanción grave cede ante el proceso de paz suscrito en forma real. No constituye una expectativa sino una realidad que se encuentra en plena discusión, es decir, aun cuando fuese aprobado el texto de implementación de la Justicia Especial para la Paz (JEP) su interpretación frente a estos puntos sigue en discusión. Aunque lo deseable es que la pena de este proceso cumpla con sus fines y funciones de legalidad constitucional y a su vez sea aceptado por la sociedad.

Todo este escenario que bien puede identificarse con la modernidad y con el Estado contemporáneo, implica que el sistema de imposición de la pena sin duda ha sido concebido para tiempos de normalidad, fuera de circunstancias de excepción y menos en tiempos de confrontación armada o después del conflicto, como en el caso colombiano. De igual forma, el sistema punitivo, en caso de que tenga que someterse a excepciones tiene como consecuencia, la afectación de toda una estructura legal que implica fuertes variaciones, sobre todo en el terreno de la legitimidad de la pena y de los mecanismos alternos que deban sustituir a dicha estructura formal y material.

Ahora en el caso nacional los límites de la pena se establecen en el art. 6° del Código Penal Colombiano (Principio de legalidad) y a su vez en los artículos 3° y 4° del mismo estatuto, que desarrollan los fines y funciones de la misma, alrededor de los tópicos mencionados. Igualmente, para su imposición en concreto se disponen las consecuencias jurídicas del delito con arreglo a los artículos 34 y 37 del Código Penal Colombiano que regula las condiciones de fijación de la pena específicamente de prisión. En este sentido, frente a sus límites puede decirse que el máximo imponible en Colombia puede estar cerca de los 50 a 60 años de duración, desde luego en delitos atroces que representen graves violaciones de Derechos Humanos.

De igual forma, los límites máximos examinados que son los relevantes en este caso, al igual que en todas las democracias contemporáneas implicaron todo un desarrollo alrededor de las teorías de la prevención o teorías relativas (Siglo XIX y XX), que desarrollaron frente a la sanción penal un criterio según el cual, todo ello no es pura retribución por el hecho cometido, ni puede fundarse en el puro racionalismo inmoral de la retribución (FERRE OLIVE, Juan Carlos. Et Al. 2010 P.P. 166 a 169). Tampoco puede fundarse en el carácter inmoral del delito, sino también en algo más práctico, como por ejemplo que no se cometan más delitos en el futuro y así proteger a los ciudadanos en el futuro (FERRE OLIVE, Juan Carlos. Et Al. 2010 P.P. 166 a 169).

En el caso de las FARC, puede decirse que la principal motivación de prevención implica que los miembros del grupo armado, no retornen a sus actividades ni subversivas ni de

delincuencia ordinaria. Así mismo, no basta esta prevención que bien podría asumirse como una obligación de todo armisticio, sino que también sobre ellos pesan obligaciones para con la sociedad de reparación a las víctimas del conflicto armado y a la confesión de todas sus actividades dentro del escenario de la subversión. En tal virtud, es imprescindible observar que las obligaciones generadas en tal virtud superan el alcance del sistema tradicional que en principio desde la jurisdicción ordinaria nacional puede interpretarse respecto de sus fines y funciones bajo las teorías de la unión. Así se puede aseverar que en este caso el mismo, no solamente está destinado en su sentido retributivo, como límite del *ius puniendi* del Estado, sino que también permite determinar el grado justo de pena imponible frente al grado de culpabilidad. (VELASQUEZ VELASQUEZ, Fernando. 2002. P. 115).

Desde este punto de vista, los límites de la pena trazada, deben en principio tomar en cuenta a los instrumentos de derechos humanos y las graves violaciones del DIH que generan elementos de interpretación en materia penal, sobre todo frente a los delitos objeto de la jurisdicción.

Lo anterior se confronta por un lado con el factor -conflicto armado- de donde derivan los derechos susceptibles de protección en el DIH, y por otra parte, con la categoría de las violaciones y crímenes internacionales; todos ellos dentro de un contexto que se presenta especialmente en los últimos 35 años en nuestro país, en una línea constitucional que se puede evidenciar desde 1995 hasta la actualidad, especialmente en sentencias como la C-225 de 1995, la C-280 de 2007 entre otras (López Diego y Sánchez Astrid 2008, 330).

Por lo tanto, bajo este criterio, se debe entender que hace parte de la Constitución misma, por medio de las cláusulas de reenvío establecidas en el art. 93 y 94 de la Carta Política y en el mismo artículo 2º del Código Penal Colombiano³. Este margen de discrecionalidad, según la

³ Esta orientación también aparece en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 15.1). Según esta norma: "Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional". Este pacto fue suscrito por Colombia en diciembre 21 de 1966, aprobado mediante Ley 74 de 1968, depósito de instrumento de ratificación en octubre 29 de 1969 y entrada en vigor para Colombia en marzo 23 de 1976.

Corte Constitucional Colombiana, deberá corresponder a los elementos de bloque de constitucionalidad que constituye el límite axiológico al ejercicio del mismo. Por esta razón, la definición de tipos y procedimientos penales debe respetar, ante todo, el ordenamiento superior referente a los derechos y la dignidad de las personas como lo señala la Corte Constitucional (Sentencia C-205, 2003).

Adicionalmente, con las obligaciones mencionadas anteriormente, los fines y funciones se observan como el mínimo punitivo a considerar, junto con los procesos transicionales que deberán ser adelantados bajo las premisas anteriores y que obligan a analizar este punto de vista. En este caso también resulta obligado verificar el proceso de justicia transicional adelantado anteriormente en Colombia, como se verá en el siguiente aparte.

De otro lado el tema de la prevención tendría que ver con la economía jurídica que en tanto dicha prevención sea eficaz, los costos para la nación, se vería reducido en la inversión para la guerra, como elemento de desarrollo social que son de tal importancia para la sociedad y para la acumulación de algunos sectores de la élite de la economía nacional que no viven de la dinámica económica de la guerra. El elemento de prevención como nexo a las penas cumple con una función utilitarista en la racionalidad del Estado determinado por los gobiernos que administran la cosa pública conforme a los términos de Sandel (2013 P. 63).

3. Los factores de la Justicia Transicional en el caso de las FARC

En este punto es necesario advertir que la Corte Constitucional de Colombia, ha considerado que la calidad y cantidad de la sanción no son asuntos librados a la voluntad democrática, toda vez que la constitución impone límites materiales claros al legislador (Constitución Política de Colombia. Arts. 11 y 12). Por ejemplo, respecto del principio de igualdad se derivan los principios de razonabilidad y proporcionalidad que justifican la diversidad de trato, atendiendo las circunstancias de caso (Constitución Política de Colombia. Art. 13). En este caso se requiere evaluar, la relación existente entre los fines perseguidos y los medios utilizados para

alcanzarlos (Colombia, CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-70 de 1996. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.).

Precisamente en esta evaluación, para efectos de la justicia transicional, es preciso cuestionarse si el sistema creado en Colombia resulta suficiente, frente a un acuerdo que plantea un escenario tolerable de impunidad. Podría adelantarse que tal vez el sistema creado mediante la “Ley de Justicia y Paz (975-2005)” puede considerarse como el instrumento idóneo para adicionar insumos relevantes para resolver a primera vista la situación, toda vez que se involucra nuevamente el concepto de la violación grave tanto del DIDH como del DIH como base para la valoración de las conductas punibles susceptibles de la jurisdicción de paz (Acuerdo final de 24 de agosto de 2016, p.115; acuerdo final de 24.11.2016).

Adicionalmente se puede afirmar que los límites mencionados, han sido aceptados en este momento de las negociaciones por parte de las FARC, conforme al acuerdo sobre justicia transicional de 23 de septiembre de 2015 y sus elementos consagrados en los acuerdos suscritos (24 de agosto de 2016; Acuerdo final de 24.11.2016). Las penas en este sentido se verifican inicialmente entre 5 y 8 años, con un máximo de 20 años en caso de que no se confiesen las conductas y se incumpla con la obligación de decir la verdad sobre los hechos objeto de investigación.⁴

En efecto, como respuesta a las exigencias del grupo armado en el proceso de negociación, puede decirse que los derechos establecidos en la justicia transicional a saber, la verdad como

⁴ Conforme al Punto 7º de la Declaración Conjunta de 23 de septiembre de 2015 entre el Estado Colombiano y las FARC: “Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales. Las personas que hagan dicho reconocimiento de manera tardía ante el Tribunal serán sancionadas con pena de prisión de 5 a 8 años, en condiciones ordinarias. Para tener derecho a la pena alternativa, se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad. Las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias”. Disponible en <http://www.elheraldo.co/internacional/esta-es-la-declaracion-conjunta-del-gobierno-y-las-farc-sobre-acuerdo-de-justicia>. Consultado el 6.11.2015.

instrumento de esclarecimiento de los crímenes principales; la justicia como valor principal de reconciliación social y la reparación como factor de atención primaria de las necesidades de las víctimas, corresponden a la estructura de mecanismos transicionales instaurados en Colombia desde el año 2005, que ahora sirven de apoyo a estas propuestas iniciales. Esta misma estructura coincide inicialmente con los elementos concebidos en el primer acuerdo de justicia transicional de 23 de septiembre de 2015 suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC y se reitera en los acuerdos finales de 24 de agosto de 2016 y 24.11.2016, sin embargo, la verdad surge como elemento principal para esclarecer los hechos realizar la investigación y adoptar las decisiones correspondientes.

En este sentido, en primer lugar se configura el apoyo al proceso que tal vez apenas inicia su construcción en la finalización del Conflicto Armado y en la consecución del acuerdo final. Así mismo, se trata de construir el factor de equilibrio para evitar el sacrificio legítimo del sistema punitivo y constitucional. (Informe de la International Bar Association (IBAHRI), 20 al 24 de Marzo de 2007. Disponible en www.ibanet.org. Consultada el 6.11.2015).

En todo caso se plasman como base los elementos de “1. Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; y 2. Compromiso con la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos. Dentro de estos compromisos se incluyen trascendentales acuerdos como la creación de la Comisión para el respeto y la garantía de los derechos humanos...” (Acuerdo final de 24 de agosto de 2016; Acuerdo final de 24.11.2016). En este sentido se establece un sistema integral de justicia que se constituye entre otros por unas salas de justicia que incluyen una Sala de Amnistía e Indulto, y un Tribunal para la Paz (acuerdo final de 24 de agosto de 2016 P.117; Acuerdo de 24.11.2016). A diferencia de la ley de justicia y paz aparece un mecanismo de amnistía e indulto, el cual apenas aparece con un procedimiento general que se encuentra en proceso de trámite de una ley general de amnistía. Es decir, todos estos factores requieren más allá de los precedentes de la ley 975 de 2005, de un código especial para la paz.

Esta codificación se viene realizando de acuerdo a cada aspecto específicos, mediante leyes especiales luego de la decisión negativa del plebiscito de 2 de octubre de 2016 que dispuso una renegociación del acuerdo anterior. El texto que luego fue ajustado, se firmó nuevamente el 24 de noviembre siguiente de 2016. Para su revisión, el ejecutivo adoptó su trámite en el Congreso, paso denominado *Fast Track*, que dispone el ejercicio de las facultades especiales del acto legislativo concedido al presidente para presentar las iniciativas de implementación de los acuerdos ante el congreso.

De igual forma como instrumento que debe ser ejercido durante el período de la transición, el mismo contiene todos los factores necesarios para determinar el período durante el cual se registran las desmovilizaciones, el cese de hostilidades hasta el logro de la paz duradera y de allí, el restablecimiento democrático y la vigencia del Estado de derecho junto con las garantías y derechos fundamentales. (Concepto disponible en www.ictj.org, Consultado el 6.11.2015.- Acuerdo final de 24 de agosto de 2016; Acuerdo final de 24 de noviembre de 2016).

Esta parece ser la orientación contenida en la declaración de 23 de septiembre de 2015. Sin embargo, es necesaria la redacción de las normas especiales para complementar la jurisdicción especial de Paz que se establece en la referida declaración. Así se vislumbra igualmente en el texto final de 24 de agosto de 2016, en el acuerdo final de 24 de noviembre de 2016 y en el reciente acto legislativo 02 de 2017 para la implementación de la jurisdicción especial para la paz.

De igual forma, en el caso colombiano, se requiere lograr de manera efectiva la denominada transición y el post conflicto, situación que todavía no se logra a raíz de que el mismo permanece vigente, pese a los ceses de fuego recientes.

Así mismo todavía es necesario indagar sobre la memoria histórica del conflicto, hecho que debe ser representado en la sociedad, para desarrollar la reconciliación ciudadana y sentar elementos de confianza social verificada en las comunidades. Todo ello, a fin de evitar la repetición del conflicto, situación frente a la cual se recurre a mecanismos como por ejemplo las Comisiones de la Verdad, que en el caso nacional todavía están pendientes de desarrollo.

(Amnistía Internacional. 2010 P. 2.). En este sentido instituciones como Amnistía Internacional señalan que: “Aunque pueda haber distintas formas de rendición de cuentas, sólo hay un tipo de justicia: la justicia basada en el respeto, la protección y la promoción del derecho de las víctimas a la justicia, a la verdad y a una reparación plena. Las investigaciones de Amnistía Internacional muestran que la justicia “punitiva” y la justicia “restaurativa” (esto es, la justicia penal y los mecanismos de búsqueda de la verdad) no son mutuamente excluyentes, sino complementarias. (Amnistía Internacional. 2010 P. 2.)

Por otra parte, el instrumento actual de justicia transicional, comienza en el terreno nacional a desarrollar una línea jurisprudencial, que en el caso de la pena objeto de análisis, coincide en determinar un instrumento alternativo incluido en el fallo, junto con la medida ordinaria que en caso de que se incumpla la pena alternativa, se procederá a efectuar el cumplimiento de la segunda es decir la pena ordinaria. El trámite previsto en la Ley 975 de 2005 tiene una naturaleza y finalidades distintas a las penas previstas en el ordenamiento procesal penal ordinario.

Así la denominada pena alternativa, cuyo máximo de duración es de 8 años (ley 975 de 2005), no es de ejecución inmediata, pues se encuentra condicionada al cumplimiento de los requisitos y obligaciones contenidos en la legislación por parte del procesado, al punto de que su no cumplimiento acarrea la pérdida del beneficio otorgado por la ley de transición.

Todo lo anterior obedece a que el objetivo buscado con la pena en la legislación ordinaria tiene una función preventiva (utilitaria), a diferencia de la legislación de Justicia y Paz, en la cual, una pena tan benigna busca efectos “de invitación a la reconciliación sin mayor retribución, a la otra oportunidad, al ejercicio de la alternativa por una vida alejada de la violencia, a la restauración de las heridas causadas con su accionar delincencial, a la transición hacia una paz sostenible, posibilitando la desmovilización armada y la reinserción a la vida civil de los integrantes de aquellos grupos violentos”. (Corte Suprema de Justicia, Radicado N. 34547, sentencia de 27 de abril de 2011 M P: María Del Rosario González de Lemos).

La observancia de tales exigencias, incluye la etapa de ejecución de la pena, de manera que ante la infracción de alguna de ellas se deberá revocar el beneficio y proceder a ejecutar la pena ordinaria. (Corte Suprema de Justicia. Sentencia de Segunda Instancia. Postulado: Jorge Iván Laverde. Proceso 35637. M.P. Luis Guillermo Salazar Otero.) Este principio en la actualidad ya estaría reconocido no sólo a nivel interno, sino también internacional y podría dar seguridad a las expectativas punitivas planteadas en el debate de negociación con las FARC.

Inicialmente, se puede decir que este mecanismo alternativo, sería el medio idóneo al que se debe acudir antes de convocar otras medidas en el escenario planteado, no sólo por su reconocimiento en el ámbito interno, sino también por la justicia internacional. Este punto corresponde a uno de los elementos de mayor tensión en la negociación.

En síntesis, la justicia transicional incorpora una perspectiva realista de los desafíos que enfrentan las sociedades que vienen saliendo de conflictos o escenarios represivos, así como una apreciación de sus contextos históricos y culturales únicos, sin permitir que estas realidades sirvan como excusa para la inacción. No obstante sin este precedente de la ley 975 o del marco jurídico para la paz sería complejo asumir una nueva discusión sobre este tipo de justicia flexibilizada. De igual forma es importante adicionar que todos los interesados en el proceso de transición deben tener la posibilidad de ser consultados y de participar en el diseño y la aplicación de las políticas de justicia transicional. (Disponible en www.ictj.org. Consultada el 23.03.2014). En este sentido se destaca el establecimiento de una jurisdicción especial de paz en los siguientes términos dentro de los puntos del acuerdo final: “Jurisdicción Especial para la Paz: Estará constituida por una serie de salas de justicia, entre las que se incluye una Sala de Amnistía e Indulto, y un Tribunal para la Paz, para administrar justicia e investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario” (Acuerdo final de 24 de agosto de 2016 P. 17; Acuerdo Final de 24.11.2016).

En este sentido es relevante observar que el año pasado (23 -09-2015) se llegan a unos puntos comunes sobre la justicia transicional, fundamento que logra avanzar hacia los elementos

posibles de un texto definitivo. Lo interesante del tema es que se mantienen los postulados específicos del acuerdo, incluso frente a los acuerdos de 24 de agosto de 2016 y 24 de noviembre de 2016, lo que sienta las bases de lo que ha sido definido como su legitimidad.

3.1. El enfoque de justicia en la ley 975 de 2005, frente a los principios del acuerdo final (24.08.2016 – 24.11.2016).

De acuerdo con los enfoques sobre justicia transicional, -según el ICTJ-, los mismos se basan en el pleno reconocimiento de la universalidad de los derechos humanos, que se soportan en normas de derecho internacional humanitario y de derechos humanos que exigen que los Estados detengan, investiguen, castiguen, reparen e impidan los abusos. Estas iniciativas se centran en las necesidades de las víctimas y sus familias lo cual se observa en los principios concebidos en la ley 975 de 2005, que a su turno, se soporta en toda la estructura jurídica internacional, tanto de resolución de conflictos como de reconstrucción de los derechos humanos (Corte Constitucional. Sentencia C-370 de 18 de mayo de 2006,).

Por otra parte, en la estructura de la ley 975 de 2005, se indicaba desde el propio artículo 1º, que el propósito de la norma se encontraba en facilitar los procesos de paz y la reincorporación de miembros de grupos armados ilegales, al margen de la ley a la vida civil.⁵ (Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 3 de agosto de 2004. P. 6). Este aspecto coincide en sus principios bajo parámetros similares, en el acuerdo final de agosto de 2016, mediante el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (Lo denomina en la sigla SIVJRNR-). Para tal efecto, el objetivo de esta justicia, se centra en satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia. Se orienta hacia la sociedad colombiana para ofrecer verdad y proteger los derechos de las víctimas, y en

⁵ Ley 975 de 2005. [Artículo 1o. Objeto de la presente ley.](#) La presente ley tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Se entiende por grupo armado organizado al margen de la ley, el grupo de guerrilla o de autodefensas, o una parte significativa e integral de los mismos como bloques, frentes u otras modalidades de esas mismas organizaciones...”

general como en el anterior proceso para contribuir al logro de una paz estable y duradera. En este campo se destaca la necesidad de adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno. Todo ello se fundamenta en una declaración de principios (Acuerdo final de 24 de agosto de 2016; Acuerdo final de 24.11.2016).

Otro aspecto de la transición, señala el establecimiento de medidas de reparación simbólica, construcción de monumentos y museos para preservar la memoria del pasado; punto 3° específico sobre el fin del conflicto (Acuerdo final de 24 de agosto de 2016 P. 117). Adicionalmente se desarrollan factores diferenciales en los casos de violencia de género, atendiendo los patrones de abuso, a fin de mejorar la justicia para las mujeres que han sido víctimas, al igual que en la ley 975, se trata de un principio específico que se denomina enfoque diferencial que incluye a mujeres, niños niñas y población más vulnerable afectada por el conflicto. (Acuerdo final de 24 de agosto de 2016 P. 116; Acuerdo final de 24.11.2016).

Fundamentalmente la ley 975 de 2005, en adelante de -justicia y paz- es el marco legal para juzgar los delitos atroces⁶ cometidos por miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que quieran dejar armas y reinserirse a la vida civil. En el acuerdo final esta obligación de persecución de crímenes internacionales también se adiciona al señalar, que la justicia (SIVJRNR-) también se ocupa de hechos cometidos en el marco del conflicto armado y durante éste que supongan graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario y graves violaciones de los Derechos Humanos. (Acuerdo final de 24 de agosto de 2016; Acuerdo final de 24.11.2016). Este factor es relevante en la medida en que se continua con la tradición de juzgar la violación grave de derechos humanos, lo cual evita cualquier consideración en su contra, toda vez que la misma no contiene un mandato de ejecución

⁶ Crímenes de guerra o Crímenes de lesa humanidad como masacres, secuestros, asesinatos torturas, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, violencia sexual y demás atentados contra la dignidad humana. CFR. Arts. 7° y 8° E.R. En escenarios muy particulares también puede ser considerado el crimen de Genocidio. Art. 6° E.R.

inmediata (PRIETO SANJUAN R. 2010, P. 62). sino que requiere de desarrollo punitivo posterior, lo cual coincide tanto en el escenario de la ley 975 como en el acuerdo final.

A través de la ley referida, el objetivo primordial consiste en que las víctimas de los actores mencionados puedan tener garantizados sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. De igual forma, la ley de justicia y paz forman parte de un marco más amplio de normas que desarrollan los procesos de desmovilización individual o colectiva de los Grupos Armados Ilegales y de su reinserción a la vida institucional y social (CIJUS, Unianides, Derecho, USAID. 2007. P. 13.). En el acuerdo se divide en dos este aspecto. Por un lado, se desarrolla una situación respecto del cese de hostilidades en donde se plantean las medidas de seguridad, concentración y desmovilización y de otra respecto del componente de justicia en donde se expresa la necesidad de la mayor amnistía posible excepto lo consagrado en el punto 25 que destaca la imposibilidad de este procedimiento en el caso de los crímenes establecidos en el Estatuto de Roma de 1998. (Acuerdo final de 24 de agosto de 2016, P. 133; Acuerdo final de 24.11.2016). Estos elementos requieren un desarrollo posterior dado que solamente se enuncian cláusulas generales sobre los principios de justicia en el acuerdo, mientras que la ley 975 fue el fruto de un texto legal descrito para los efectos de la primera desmovilización de grupos armados organizados en el Conflicto para el año 2006.

Básicamente los fundamentos concebidos en los acuerdos, establece unos elementos comunes con la ley de justicia y paz, que revelan un procedimiento judicial en materia penal que se organiza de la siguiente forma:

Primero se crea un sistema integral de justicia para la paz mediante las siguientes instituciones (Acuerdo final de 24.08.2016 – Acuerdo final de 24.11.2016):

- Comisión para el esclarecimiento de la Verdad la convivencia y la no repetición
- Unidad especial para la búsqueda de personas desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado

- Jurisdicción especial para la paz: Conformada por Salas de Justicia (Amnistía e Indulto); Tribunal para la paz – (Investigar y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos y graves infracciones del DIH.)
- Medidas de reparación integral para la construcción de la paz.
- Garantías de no repetición.

El aspecto relacionado con la Investigación de los delitos cometidos por el desmovilizado durante su pertenencia al grupo armado ilegal, en el acuerdo final se plantea como fundamento para la sanción de las conductas y el grado de contribución voluntaria de cada persona o colectivo a la verdad. La misma estará en relación con el tratamiento a recibir en el componente de justicia. Sin embargo, este componente de justicia (JEP) solamente se aplicará a los combatientes que suscriban el acuerdo final. (Acuerdo final de 24 de agosto de 2016, P. 134; Acuerdo final de 24.11.2016).

- Los delitos que debe confesar en justicia y paz (ley 975 de 2005) se realizan en una diligencia especial, denominada versión libre y luego de la verificación en la investigación que inicia la fiscalía, se someten a la aceptación en la formulación de cargos realizada por la Fiscalía (Artículos 16 a 28 ley 975 de 2005. Diario Oficial No. 45.980 de 25 de julio de 2005.). En el caso de la jurisdicción especial de paz, se denomina reconocimiento de verdad plena sobre lo ocurrido. La misma incluye de igual forma los delitos cometidos por agentes estatales en forma equilibrada y simétrica pero diferenciada (Punto 34 acuerdo final de 24 de agosto de 2016 P. 135; Punto 15 Acuerdo final de 24.11.2016).

Es importante en este caso los delitos susceptibles de amnistía que se advierten expresamente sobre las siguientes conductas: “Entre los delitos políticos y conexos se incluyen, por ejemplo, la rebelión, la sedición, la asonada, así como el porte ilegal de armas, las muertes en combate compatibles con el Derecho Internacional Humanitario, el concierto para delinquir con fines de rebelión y otros delitos conexos.” (Punto 39 acuerdo final de 24 de agosto de 2016 P. 135). Se incluye la posibilidad de conexidad de conductas delictivas relacionadas con cultivos de uso ilícito conforme a los desarrollos jurisprudenciales nacionales o que ayuden a la financiación del delito de rebelión y conexos, excepto que los mismos constituyan

crímenes de lesa humanidad, genocidio o grave crimen de guerra. (Acuerdo final de 24.11.2016 puntos 38, 39, 40 y 41)

- En el caso de justicia y paz (L. 975 de 2005), una vez se formulan los cargos y estos han sido aceptados por el postulado, los magistrados de las salas de justicia y paz de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, deciden sobre la imposición de una pena, de acuerdo con los criterios establecidos en la ley. En el caso de la JEP esto se desarrolla una vez se realice el proceso de reconocimiento de verdad y responsabilidad. (Punto 46 del acuerdo final de 24.11.2016)
- En la sentencia condenatoria se fija la pena principal, como también las penas accesorias. Adicionalmente se incluirá una pena alternativa prevista, que no podrá ser inferior a 5 años ni superior a 8 años, atendiendo la colaboración y cumplimiento del desmovilizado, conforme a los requisitos de postulación como por ejemplo la veracidad en las versiones sobre los delitos cometidos con ocasión a su pertenencia al Grupo Armado legal. Así mismo, se tiene en cuenta también, la observación de un comportamiento por el término que disponga el Tribunal, para cumplir con las obligaciones de reparación moral y económica a las víctimas y la extinción del dominio de los bienes que se destinarán a la reparación. En este sentido, se aprecian similitudes en el actual proceso de paz, que siguen esta tendencia de justicia transicional, como por ejemplo en los requisitos especiales para la fijación de la pena alternativa que se describen en los artículos 24 y 29 de la ley 975 de 2005. (Diario Oficial No. 45.980 de 25 de julio de 2005.).

Este tipo de procesos evidencian, que la estructura del Estado, así como se ha visto afectada por el conflicto, también se puede ver beneficiada positivamente por el reordenamiento jurídico con los acuerdos a que se llegue por las diferentes formas de reparación dado que el *campo jurídico* (Moreno Álvaro, Ramírez José Ernesto, 2011. P. 50) actúa como regulador y legitimador en su conjunto de los demás Campos dentro de un Estado de derecho. Lo anterior, quiere decir que de llegarse a un acuerdo de paz la *economía del derecho* brinda oportunidad de desarrollo económico estructural, mediante la economicidad del Estado al estilo utilitarista contemporáneo. Este aspecto además cuenta con el precedente de la ley analizada de justicia

y paz que marca no sólo una tendencia, sino además un estándar aceptable en la comunidad internacional (Sandoval Mesa Jaime A. 2015, P.P. 115 y 116).

3.2. Los fundamentos transicionales en la perspectiva de negociación.

Ahora bien, como fórmulas de aplicación de los mecanismos mencionados, se reitera a la justicia transicional con prevalencia superior sobre todo el andamiaje jurídico interno como desarrollo del derecho a la paz y la reconciliación nacional, el cual, siempre en estos escenarios entra en tensión como en el caso de la ley 975 de 2005, frente a los demás derechos, en particular, frente a la justicia penal tradicional. Sin embargo, aquí se realiza una ponderación para este equilibrio que se resuelve a favor de la paz y en la actualidad aparece claro que esta justicia flexible tiene legitimidad y ha tenido un grado importante de aceptación en el consenso social, estructura que ahora se plantea de manifiesto en la totalidad de las cláusulas del acuerdo final de 24 de agosto de 2016 y en el acuerdo de 24 de noviembre de 2016.

Finalmente, como reflejo del propósito trazado en la ley de justicia y paz se reitera en la reforma de la ley 1592 de 2012, el objeto de reconciliación en los mecanismos relacionados con la fijación de la pena, mediando la garantía del derecho de defensa de los procesados y la participación efectiva de las víctimas.(Disponible en <http://legal.legis.com.co/frmMainContainer.aspx> Consultada el 7.05.2014.). Este aspecto a lo largo del punto 5 acude a la fórmula de preservar los derechos de las víctimas conforme a los diferentes mecanismos de justicia planteados los cuales en ningún caso exceptúan el deber de reparación. (acuerdo final de 24 de agosto de 2016; Acuerdo final de 24 de noviembre de 2016)

Esto tiene relevancia en el tema analizado, toda vez que la reforma establece mecanismos especiales frente a la Pena alternativa (Art. 29 Ley 975 de 2005), que se traduce en caso de que el condenado haya cumplido las condiciones previstas en la ley de justicia y paz. Para tal efecto la Sala del tribunal puede imponer una pena alternativa que consiste en privación de la libertad por un período mínimo de cinco (5) años y no superior a ocho (8) años, tasada de

acuerdo con la gravedad de los delitos y su colaboración efectiva en el esclarecimiento de los mismos⁷. Así la Ley 1592 de 2012, busca agilizar los procesos que se adelantan bajo este esquema. De acuerdo con esta norma, los nuevos desmovilizados tendrán un año para solicitar su postulación. La nueva ley transforma el incidente de reparación integral en un incidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas con la conducta criminal, que no podrá extenderse por más de 20 días hábiles. Además, si el postulado decide retirarse del proceso de justicia y paz, podrá presentar su solicitud ante el fiscal o el magistrado del caso en cualquier momento del proceso, incluso antes del inicio de la diligencia de versión libre. (Disponible en <http://legal.legis.com.co/frmMainContainer.aspx> Consultada el 7.05.2014.).

Estos desarrollos de la ley 975 tampoco se apartan de la consideración planteada inicialmente en el acuerdo final, toda vez que el mecanismo de justicia se integra no sólo por las salas de amnistías e indultos y el tribunal de justicia, sino también por unas salas para el reconocimiento de verdad y responsabilidad de conductas, sino también de una unidad de investigación y otra de definición de situación jurídica (Acuerdo final de 24 de agosto de 2016 P. 138). En estos escenarios se revela el deber de reconocimiento de la verdad bien en forma individual o colectiva frente a las conductas punibles, lo cual se asemeja a los condicionamientos trazados anteriormente en la ley 975 y que en el acuerdo se desarrollan de manera específica en el punto 48 (Acuerdo final de 24 de agosto de 2016 P.P. 138 y 139).

⁷ Ley 1592. De 2012 Ley de reforma de Justicia y Paz Art. 29. (...) Para tener derecho a la pena alternativa se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, estudio o enseñanza durante el tiempo que permanezca privado de la libertad, y a promover actividades orientadas a la desmovilización del grupo armado al margen de la ley al cual perteneció. Cumplida la pena alternativa y las condiciones impuestas en la sentencia se le concederá la libertad a prueba por un término igual a la mitad de la pena alternativa impuesta, período durante el cual el beneficiado se compromete a no reincidir en *(los)* delitos *(por los cuales fue condenado en el marco de la presente ley)* , a presentarse periódicamente ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial que corresponda y a informar cualquier cambio de residencia. Cumplidas estas obligaciones y transcurrido el período de prueba, se declarará extinguida la pena principal. En caso contrario, se revocará la libertad a prueba y se deberá cumplir la pena inicialmente determinada, sin perjuicio de los subrogados previstos en el Código Penal que correspondan (...).Disponible en <http://legal.legis.com.co/frmMainContainer.aspx> Consultada el 7.05.2014.

Las reformas citadas se desarrollan igualmente, frente al establecimiento de criterios de priorización que en el momento han sido regulados por el Fiscal General de la Nación a través de reglamentos internos (Directiva 0001 de 4 de octubre de 2012). La priorización es una técnica de gestión de la investigación penal que permite establecer, de acuerdo con unos criterios, un orden de atención de casos con el fin de garantizar, en condiciones de igualdad material, el goce efectivo del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia. ([Directiva 0001 de 04 de octubre de 2012](#)). Este nuevo sistema está enfocado entre otros aspectos, hacia la persecución efectiva de los máximos responsables de la comisión de crímenes de sistema, perpetrados por aparatos organizados de poder, a efectos de conocer la verdad de lo sucedido, evitar su repetición y propender por la reparación. (Disponible en: <http://www.fiscalia.gov.co/colombia/priorizacion/priorizacion-nuevo-sistema-de-investigacion-penal/>. Consultada el 7.05.2014.).

Este punto es relevante, pues la justicia de transición atiende un criterio de selectividad, debido a que se trata de crímenes internacionales ejecutados en forma sistemática, denominados también de ejecución de políticas macrocriminales, que desbordan la capacidad de juzgar a todos los posibles autores y ejecutar la reparación de las víctimas del conflicto. (JAIMES-AMADO María Cecilia & PRIETO SANJUAN Rafael, 2010 P. 206). Al menos este ha sido el objetivo trazado en la ley 975 de 2005 y para ello ha tomado múltiples mecanismos de justicia transicional tanto judiciales como no judiciales concebidos en la ley referida a fin de abarcar las distintas dimensiones de la justicia para que se puedan sanar las heridas y contribuir a la reconstrucción social (TEITEL Ruti G. 2003. P.P. 69-94.). Este punto se armoniza en el acuerdo con la propuesta de amnistía e indulto que en todo caso excluye los crímenes más graves a nivel internacional y según el punto -43.- no extingue el derecho de las víctimas a recibir reparación (Acuerdo final de 24 de agosto de 2016 P. 136 – Puntos 40 y 41 Acuerdo final de 24.11.2016).

A manera de adenda se podría agregar que todo el sistema que se ha construido desde la ley 975 sus reformas y la Justicia especial para la Paz obedece a elementos de consenso social. Es decir, la reconstrucción social es un *buen negocio* para una sociedad puesto que dependiendo de las reparaciones y de la ruptura de los ciclos de la violencia se podría pensar

en una paz, próxima al orden, que en buen término de Comte aseguraría en algunos aspectos, no obstante la rigidez positiva normativa, en algo de progreso para una sociedad que se ha debatido entre ciertas anarquías y el control jurídico como lo es caso colombiano.

4. Las instancias internacionales, frente a la ley de justicia y paz. Estándares de protección frente al acuerdo final

En primer lugar, es preciso señalar que a pesar de la flexibilidad de la ley de justicia y paz, ante el escenario interamericano no puede considerarse que es una ley de impunidad absoluta y guardadas las proporciones ante estándares ideales, puede decirse que atiende en alguna medida las exigencias de protección judicial, en relación con los derechos a la verdad la justicia y la reparación. En justicia y paz se desarrollan los derechos prevalentes en el sistema interamericano relativos a la efectiva protección judicial arts. 8º y 25 de la CADH. De igual forma se advierte como la ley 975 tampoco puede ser considerada como una ley de impunidad. Es decir, no se trata de una ley de amnistía ni de indulto. (AMBOS Kai. 2007. P.P. 175 a 185). Si el estandar examinado por la CIDH asegura tales condicionamientos, el acuerdo final tampoco constituye una ley de impunidad, sin embargo el componente de amnistía e indulto es mucho mayor que el aseverado en la ley 975 de 2005.

La CIDH en el informe rendido frente al a ley de justicia y paz, señaló en sus conclusiones y recomendaciones que la decisión de la Corte Constitucional mejora de manera sustancial el balance originalmente establecido en la Ley 975 de 1995 entre el sistema de incentivos legales para la desmovilización, a través de la morigeración de penas, y los principios de verdad, justicia y reparación que hacen parte de las obligaciones internacionales del Estado (Conclusiones Informe CIDH, 2006). La decisión precisa Igualmente, los requisitos para acceder a la pena alternativa y para preservarla en el futuro sin exponerse a su revocación. Desincentiva el ocultamiento de información y promueve que las confesiones sean veraces y completas (Conclusiones Informe CIDH, 2006). Nuevamente se pueden hacer válidas tales críticas al proceso estatuido en el acuerdo final (24 de agosto de 2016 P. 138 y ss; Acuerdo final de 24.11.2016 Punto 60)

Otro aspecto a considerar en el acuerdo, se señala dentro del procedimiento de reconocimiento de la verdad y responsabilidad para la determinación de conductas, no obstante, se incluye a nivel general la participación de las víctimas que de cualquier forma merece en este sentido un procedimiento específico para tales aspectos (Acuerdo final de 24 de agosto de 2016 Punto 48 p. 138 y ss.)

De igual forma señala el deber de los desmovilizados de revelar las circunstancias de tiempo modo y lugar de sus crímenes; de señalar los lugares donde se hallan los cadáveres de las víctimas; a la reparación de las mismas, así como también, se advierte la pérdida de los beneficios por no colaborar con las cláusulas que establecen tales garantías, esto concuerda con pronunciamientos internacionales que han establecido esta obligación de manera específica a fin de cumplir con elementos de justicia restaurativa (Conclusiones Informe CIDH, 2006).

Adicionalmente, se impone para las autoridades la obligación de actuar en el plazo razonable para imputar los crímenes desarrollar las investigaciones fijar pautas uniformes para el otorgamiento de la pena alternativa, reparación de bienes entrega de tierras etc. (Conclusiones Informe CIDH, 2006). Este principio establece derechos que garantizan la celeridad en las actuaciones y que es también oponible a las decisiones del Tribunal de paz descrito en el punto 52 de las negociaciones. (Acuerdo final de 24 de agosto de 2016 P. 143; Acuerdo final de 24.11.2016)

Ahora frente a la CPI, también es evidente que sólo ante el fracaso del proceso y que se determine claramente que no existió realmente y que las personas juzgadas, no correspondían a los miembros desmovilizados, o que no se juzgó a nadie o se hicieron maniobras para evitar incluso el proceso alternativo de justicia y paz, habría en primer lugar argumentos para variar los principios esbozados en la sentencia de constitucionalidad de dicha normatividad (AMBOS Kai, 2007, P.P. 202 y 203). Bajo tales elementos se podrían adicionar argumentos para poner en conocimiento ante la CPI los diferentes procesos fallidos por ejemplo frente a elementos de admisibilidad (Artículo 17 ER). No obstante el texto hace referencias especiales frente a las

obligaciones de la JEP con respecto al Estatuto de Roma de 1998. Sin embargo el punto todavía merece mayor análisis sobre todo en los procesos de implementación.

1. Elementos de comparación frente al proceso de paz con las FARC

Como se puede observar, el proceso adelantado en la ley 975 de 2005 desarrolló un componente legítimo frente a la pacificación y justicia de los grupos desmovilizados ante dicha instancia, pese a sus desaciertos y aun frente a la ausencia de resultados tangibles para algunos en materia de justicia efectiva. Sin embargo, lo cierto es que posee un reconocimiento internacional. Estos elementos frente al proceso de paz de la actualidad con las FARC, tiene una función primordial de precedente que obliga al esclarecimiento, investigación, declaración y reparación de víctimas, frente a los crímenes más graves cometidos en contra de la sociedad colombiana. En algunos aspectos sobre todo de la JEP ha servido de punto de partida.

El gobierno nacional ha señalado al respecto, que las anteriores experiencias de procesos de justicia transicional en Colombia y las experiencias internacionales demuestran que no es posible satisfacer los derechos de todas las víctimas, mediante el proceso penal o los procesos extra judiciales. Es decir, se tiene que enfrentar un alto nivel probable de no aceptación social. No obstante, se tiene claro que se trata de un lado de incentivos para el reconocimiento de responsabilidad, el esclarecimiento de la verdad y la contribución a la reparación y del otro de un tratamiento especial de justicia para cada miembro desmovilizado en sus diferentes grados de represión judicial. (Disponible en <http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/oacp/Pages/informes-especiales/abc-del-proceso-de-paz/victimas.html>. Consultada el 3.03.2016.)

Estas actuaciones residen indiscutiblemente en el escenario del conflicto nacional, en sus causas en su historia reciente y en la motivación nacional de conocer la verdad sobre tales acontecimientos. Por lo tanto, toda actuación que impida a las autoridades públicas ejercer tal función, como lo indica la CIDH en el informe analizado, estaría conspirando con las

razones que le dan fundamento al proceso. Todo el acuerdo final pone de presente este factor con ocasión y en desarrollo del conflicto armado como base para la justicia integral.

Es decir, el proceso de las FARC también se encuentra sometido al estándar internacional señalado. Sobre este punto, lo relevante se centra en el acuerdo de las partes de crear un sistema de rendición de cuentas ante un Tribunal nacional para investigar, juzgar, sancionar las conductas y además se acepta que hay delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto armado que son tan graves y que no pueden ser objeto de amnistías e indultos (Disponible en <http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/oacp/Pages/informes-especiales/abc-/del-proceso-de-paz/victimas.html>. Consultada el 3.03.2016.). Estos elementos se desarrollan de manera específica en los fundamentos que se describen desde el punto 48 hasta el punto 64 del acuerdo final. Allí se comprende tanto el reconocimiento de la verdad, investigación de conductas, procedimiento, sentencia recursos, sanciones penales etc. (Acuerdo final de 24 de agosto de 2016 P.138 a 148; Acuerdo final de 24.11.2016 P. 126 a 177. Puntos 1 a 75.)

En esta medida es preciso aclarar que las instancias judiciales en justicia y paz (Ley 975 de 2005), así lo han declarado en pronunciamientos judiciales que además pueden indicar una línea de precedente destinado a las actuaciones que servirán de fundamento al proceso frente a las FARC (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Proceso No 29560 Segunda Instancia de Justicia y Paz. Decisión de 28 de mayo de 2008. M.P. Augusto Ibáñez Guzmán.).

En este sentido, como lo señala “El derecho a la justicia requiere de investigaciones judiciales dirigidas a la individualización de los responsables y a la determinación de la sanción, para tal efecto lo cierto es que ningún estándar internacional obliga a que se imponga una pena carcelaria, o excluye la posibilidad de otras penas. Lo que sí exigen los estándares internacionales es que la pena, sea cual sea su naturaleza, sea proporcional con la gravedad de los crímenes y con la responsabilidad.” (FAJARDO A.L. 2016 P.257)

Finalmente, la transición del conflicto armado a la paz en Colombia se hará garantizando el derecho de las víctimas a la justicia, lo que representa un factor de justicia internacional. Por este motivo las sanciones establecidas corresponden a las siguientes:

“Sanciones: (i) propias; (ii) alternativas; y (iii) ordinarias.

Las sanciones propias se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la JEP respecto a determinadas violaciones e infracciones muy graves. Tendrán un contenido restaurativo y reparador, así como un componente de restricción efectiva de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento. Tendrán una duración de entre 5 y 8 años.

Las sanciones alternativas se impondrán a quienes reconozcan tardíamente verdad y responsabilidad, antes de proferir la sentencia. Tendrán una función esencialmente retributiva de pena privativa de la libertad de 5 a 8 años.

Finalmente las sanciones ordinarias se impondrán a quienes no hayan reconocido responsabilidad y sean condenados por parte del Tribunal. Tendrán una función esencialmente retributiva de pena privativa de la libertad. En todo caso la privación efectiva de libertad no será inferior a 15 años ni superior a 20 en el caso de conductas muy graves...”. (Disponible en <http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/oacp/Pages/informes-especiales/abc-del-proceso-de-paz/victimas.html>. Consultada el 3.03.2016. De igual forma se puede consultar los puntos 60 y 61 del acuerdo final donde se desarrollan de manera concreta tales puntos. (Acuerdo Final de 24 de agosto de 2016 P. 147; Acuerdo Final de 24.11.2016 Puntos)

De lo anterior se deriva que la discusión alrededor de la pena entre 5 y 8 años por delitos graves contra la humanidad, implica que los máximos responsables puedan o no cumplir medidas privativas de la libertad independientemente de los rangos de pena señalados anteriormente. Igualmente se desconoce la recepción de la sociedad y credibilidad, lo cual ya corresponde a uno de los puntos objeto de acuerdo en materia de justicia transicional y que tendrá que recibir un mayor desarrollo que los parámetros generales indicados.

Finalmente, se pondera con mayor razón los fundamentos esbozados de la ley de justicia y paz, los cuales le pueden servir de apoyo a las instancias judiciales, en caso de que se suscriba un acuerdo de paz con las FARC, dadas las circunstancias de legitimidad que soportan dicha legislación.

Conclusiones:

En general la convalidación de las instancias internacionales examinadas, implica que existe en Colombia un mínimo común universal reconocido frente a la posible imposición de penas para las FARC, en las negociaciones de paz actuales. El problema que se deriva de allí en adelante consiste en determinar si los actores del conflicto mencionados reconocen este factor imprescindible para la resolución y posible firma del armisticio. En el momento se ha suscrito el acuerdo final, pero merece una atención especial su desarrollo, lo cual implica factores que coinciden con los esfuerzos anteriores de la ley 975 de 2005. Es decir aparecen más semejanzas que diferencias en tales procesos, con lo cual la discusión sobre su alcance y protección en términos de impunidad merece el mismo tratamiento de la legislación anteriormente citada.

Igualmente, los problemas que se suscitan a partir de este mínimo punitivo flexible descrito en la justicia especial examinada, sus reformas y demás mecanismos que la adicionan, servirán de parámetros para el desarrollo de la jurisdicción especial que debe ser creada en virtud del acuerdo final sobre justicia transicional.

Así mismo la verificación de medidas de cumplimiento de sanciones distintas a las penas privativas de la libertad, hasta qué punto corresponde a las zonas especiales de concentración con pasos distintos a las penas intramurales que se discuten en la actualidad y cuál es el alcance de su aceptación social. Lo anterior implica que en el proceso colombiano, las medidas alternas tendrán elementos de menor cumplimiento bajo penas de presidio que las actuales, en el sistema descrito anteriormente en el escenario de justicia y paz.

Como una conclusión general de este artículo, es el de haber podido incluir la mirada socio jurídica en cuanto el espíritu de la escuela utilitaria que hay detrás de estos acontecimientos del derecho en la justicia transicional mediante los marcos del derecho internacional ya preestablecidos por las trayectorias de los campos jurídico de las naciones que en su relación

con el campo económico incide en lo que se podría denominar la economía del derecho inspirado en la economía de las prácticas sociales planteada por el sociólogo Pierre Bourdieu.

De igual forma, el modelo elegido para ejercitar el derecho penal, en este caso, demuestra que los principios clásicos (liberales), se deshacen en aras de la eficacia de la administración de justicia, porque en este sistema la pena no depende del hecho realizado sino de la conducta procesal asumida por el implicado. La pena no depende de la conducta delictiva del procesado sino de la conducta observada en el proceso y de la restauración social.

Bibliografía

1. ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCION DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA. Delegados Gobierno Nacional y Delegados Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia EP - Presidencia de la República de Colombia, de 24 de agosto de 2016.
2. ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCION DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA. Delegados Gobierno Nacional y Delegados Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia EP - Presidencia de la República de Colombia, de 24 de noviembre de 2016
3. AMBOS Kai. El Marco Jurídico de la Justicia de Transición. Edit. Temis S.A. Bogotá D.C. 2007
4. Colombia, CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-70 de 1996. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
5. COMISIONAR LA JUSTICIA, LAS COMISIONES DE LA VERDAD Y LA JUSTICIA PENAL. Amnistía Internacional. Editorial -EDAI. Madrid España. 2010. P. 2. Disponible en <http://www.amnesty.org/es/library/asset/POL30/004/2010/en/46206892-791e-45c5-a31f-ff069b369c0b/pol300042010spa.pdf>. Consultada el 27.11.2014.
6. CONOCER PARA DEFENDERSE. Cartilla de capacitación e información sobre los Derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Edit. Centro de Investigaciones Sociojurídicas (CIJUS) de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. USAID. Bogotá D.C. 2007. pág.
7. Corte Constitucional. Sentencia C-370 de 18 de mayo de 2006, Magistrados Ponentes. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández.
8. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Radicado N. 34547. M P: María Del Rosario
9. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal Proceso No 29560 Segunda Instancia de Justicia y Paz. Decisión de 28 de mayo de 2008. Postulado. Wilson Salazar Carrascal. M.P. Augusto Ibáñez Guzmán.
10. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia de Segunda Instancia. Postulado: Jorge Iván Laverde. Proceso 35637. M.P. Luis Guillermo Salazar Otero.
11. Directiva 0001 de 04 de octubre de 2012). Disponible en <http://www.fiscalia.gov.co/colombia/priorizacion/priorizacion-nuevo-sistema-de-investigacion-penal/>. Consultada el 7.05.2014.

12. El Estado de Derecho y la justicia de Transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos. Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 3 de agosto de 2004. UN.Doc. S-2004-616.
13. FAJARDO ARTURO Luis Andrés. (2016) Estándares Internacionales en materia de Justicia Transicional, Aplicables a Colombia. Justicia Transicional, el Caso de Colombia. Edit. Universidad Externado de Colombia. Bogotá D.C.
14. FERRE OLIVE Juan C. Et AL. Derecho Penal Colombiano Parte General. Grupo Editorial Ibáñez. Primera Edición. Bogotá D.C. Colombia 2010. P. 75
http://www.uca.edu.sv/idhuca/images/descargas/descargas_publicaciones/7_tiajres_2009.pdf. Consultado el 12.11.2017)
15. Instituto de Derechos Humanos de la International Bar Association (IBAHRI). La Cooperación Internacional y la Lucha Contra la Impunidad en Colombia. Informe de la International Bar Association (IBAHRI) elaborado en la visita a la República de Colombia realizada del 20 al 24 de Marzo de 2007. Proyecto realizado con el apoyo de la Embajada Británica en Bogotá, Colombia. Disponible en www.ibanet.org.
16. ITURRALDE Manuel. Castigo, Liberalismo autoritario y justicia penal de excepción. Ed. Siglo del Hombre Editores. Universidad de los Andes. Pontificia Universidad Javeriana-Instituto Pensar. Primera Edición. Bogotá D.C. Colombia, 2010. Pag. 62
17. JAIMES-AMADO María Cecilia & PRIETO SANJUAN Rafael. Justicia y Paz o cuando todos los caminos conducen a...La Haya. *International Law No 17, Revista Colombiana de Derecho Internacional*, 165-230. Bogotá D.C. Colombia, (2010). P. 206.
18. SANDEL Michael J. JUESTICIA. (noviembre 2013) editorial debolsillo. Cuarta edición.
19. Ley 1592 de 2012. Diligencia de versión libre. Disponible en <http://legal.legis.com.co/frmMainContainer.aspx> Consultada el 7.05.2014.
20. Ley 975 de 2005. Diario Oficial No. 45.980 de 25 de julio de 2005.
21. LOPEZ Diego y SANCHEZ Astrid. *La armonización del Derecho Internacional de los Derechos Humanos con el Código Penal Colombiano*. Vol. 12. Bogotá: Revista International Law, Pontificia Universidad Javeriana, 2008.
22. MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal Parte General. Editorial Reppertor, S.L. 5ª Edición. 3ª Reimpresión. Barcelona, España, 2003 P. 64.
23. MOOR Marianne y ZUMPOLLE Liduine. La Industria del Secuestro en Colombia, un negocio que nos concierne? Edit. Pax Christi, Utrecht, Holanda, enero de 2002. P. 21.
24. MORENO Álvaro, RAMIREZ José Ernesto, (2011) Sociología del campo jurídico en Colombia, relaciones y perspectivas. editorial Universidad Santo Tomás. Bogotá D.C.
25. PRIETO SANJUAN Rafael (2010) Crímenes de guerra. Infracciones y violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario.
26. Pronunciamiento de la CIDH sobre la aplicación y el alcance de la ley de Justicia y Paz en la República de Colombia. OEA/Ser/L/V/II.125 Doc. 15 1 agosto 2006 Original: Español. Disponible en:
www.cidh.org/pdf%20files/Pronunciamiento%20Ley%20de%20Justicia%20y%20Paz.pdf.
Consultada el 27.11.2014
27. SANDOVAL MESA Jaime A. (2015) Hors-série (mars 2015) Revue québécoise de droit international. Edit. Université du Québec à Montréal, Canadá.
28. TEITEL Ruti G. *Genealogía de la Justicia Transicional*. Artículo traducido al castellano por el Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad de Chile. Santiago 2003. Título original: "Transitional Justice Genealogy". Publicado en Harvard Human Rights Journal, Vol. 16, Spring 2003. Cambridge, MA, pp. 69-94.
29. TRIBUNAL DE APLICACIÓN DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL EN "EL SALVADOR". (2009) Instituto de Derechos Humanos. Universidad José Simeón Cañas. San Salvador. (P.P. 7 Y 8) Disponible en
30. VELASQUEZ VELASQUEZ, Fernando. Manual de Derecho Penal Parte General. Editorial Temis. Primera Edición. Bogotá Colombia 2002. P. 115
31. WWW.ICTJ.ORG

Informe de producción investigativa

Tipo de productos derivados del desarrollo del proyecto según compromisos adquiridos: movilidades (Código ORII), publicaciones (ISBN, aceptación artículo o publicación), alianzas/redes establecidas (cartas de intención, convenios, etc.), otro tipo de productos (evidencia y medio de verificación). Si es producto no se encuentra terminado al momento de la entrega del informe, se debe relacionar una fecha tentativa de entrega.

Se debe diligenciar la siguiente tabla de relación de productos y relacionar los anexos correspondientes:

Tipo de producto	Nombre de producto	Fecha de revisión, publicación o presentación (Indique fechas de publicación, revisión o presentación en evento del producto. Si aún no se tiene el producto final, indique la fecha de entrega)	Nombre de la revista/libro o evento en que se presenta el producto. (Si el producto no se ha finalizado indicar el medio en el que se proyecta la publicación o divulgación)	Modo de verificación (ISSN, ISBN, página web, etc. Si el producto no se ha finalizado, escribir “no se ha finalizado” en esta columna.)	Número de anexo (Incluya en los anexos, de manera ordenada el soporte escaneado que demuestre la existencia del producto o el envío a revisión –asigne un número a cada anexo y relaciónelo en esta columna. Si el producto no se ha finalizado, escribir “no se ha finalizado” en esta columna)
Artículo Indexado. Quebec Journal Of International Law.(Scopus)	El problema de los límites de la pena de las FARC frente a las propuestas presentadas en las negociaciones de paz en Colombia	Marzo de 2015	Quebec Journal Of International Law.(Scopus): https://www.sqdi.org/fr/el-problema-de-los-limites-de-la-pena-de-las-farc-frente-a-las-propuestas-presentadas-en-las-negociaciones-de-paz-en-colombia/ .	ISSN - 08289999 Quebec Journal Of International Law	Se adjunta el documento anexo.
Capítulo de Libro: Autores Alvaro Moreno Durán, Jaime Alberto Sandoval Mesa Nhory Torregrosa.	El preámbulo de la constitución política de 1991, presupuestos de su creación y fundamentos de su proyección en el texto constitucional	Mayo de 2017	Libro: Justicia Constitucional II. Editorial Gustavo Ibañez. 2017	ISBN: 9789587497700	Se adjunta el documento anexo.
Artículo Indexado: Autores: Alvaro Moreno Durán, Jaime Alberto Sandoval Mesa	LE CHAMP JURIDIQUE HYBRIDE ET LA JUSTICE TRANSITIONNELLE EN COLOMBIE	Enviado 4 de septiembre de 2017	Quebec Journal of International Law	ISSN - 08289999 Quebec Journal Of International Law	Se adjunta respuesta en archivo pdf de sometimiento a evaluación del Artículo.

Ponencia:	Los acuerdos de Paz en Colombia	11 de junio de 2015	"3rd edition of the Summer School on The juridical-political order in Latin America and its relations with Canada Internacional <i>Realizado del:2015-06-08 al 2015-06-18 en la CIUDAD DE MEXICO DF - Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus ciudad de México</i>	Se adjunta certificación. Del evento y de la ponencia.	Se adjunta certificación.
Jaime Alberto Sandoval Mesa					
Ponencia: Jaime Alberto Sandoval Mesa	Colombian History Through its Constitution and Introduction to the Colombian Legal System	30 de junio de 2016	Summer Program: The Juridical Political order in Latin America and its relations with Canada. Universidad de Ottawa Canadá – 27 de junio al 8 de julio de 2016. Simposio internacional.	Se adjunta certificación del evento.	Se adjunta certificación.
Ponencia: Jaime Alberto Sandoval Mesa	The legal explanation of the conflict and peace accord - What's Happening with Transicional Justice	1 de julio de 2016	Summer Program: The Juridical Political order in Latin America and its relations with Canada Universidad de Ottawa Canadá – 27 de junio al 8 de julio de 2016. Simposio internacional-	Se adjunta certificación del evento.	Se adjunta certificación.
Ponencia: Alvaro Moreno Duran	Colombian History Through its Constitution and Introduction to the Colombian Legal System	30 de junio de 2016	Summer Program: The Juridical Political order in Latin America and its relations with Canada Universidad de Ottawa Canadá – 27 de junio al 8 de julio de 2016. Simposio internacional-	Se adjunta certificación del evento.	Se adjunta certificación

*Tenga en cuenta la tipología de productos de Colciencias.

Contenido del informe financiero

Por favor relacione los rubros que le fueron asignados

Horas nómina	Investigador	Número de horas asignadas	Escalafón
	ALVARO MORENO DURAN	39 HORAS MENSUALES	4
	JAIME ALBERTO SANDOVAL MESA	12 HORAS MENSUALES	2

Otros rubros	Especifique el concepto	Describa el concepto	Valor del concepto ejecutado
--------------	-------------------------	----------------------	------------------------------